

No. 26455

—

**SPAIN
and
HUNGARY**

**Agreement on reciprocal enforcement of judicial decisions
in criminal cases. Signed at Budapest on 28 September
1987**

Authentic texts: Spanish, Hungarian and French.

Registered by Spain on 27 February 1989.

—————

**ESPAGNE
et
HONGRIE**

**Convention relative à l'exécution réciproque des décisions
judiciaires en matière pénale. Signée à Budapest le
28 septembre 1987**

Textes authentiques : espagnol, hongrois et français.

Enregistrée par l'Espagne le 27 février 1989.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO SOBRE EJECUCIÓN RECÍPROCA DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA POPULAR HUNGARA

Su Majestad el Rey de España y el Consejo de Presidencia de la República Popular Húngara,

Deseando profundizar las relaciones jurídicas entre los dos Estados y facilitar su intercomunicación en el ámbito judicial, así como favorecer la reintegración social de las personas que hubieran sido objeto de condena, han convenido en concluir un Convenio sobre ejecución recíproca de resoluciones judiciales en materia penal y, a tal efecto, han designado plenipotenciarios:

Su Majestad el Rey de España: al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Ministro de Justicia;

El Consejo de Presidencia de la República Popular Húngara: al Sr. Dr. Imre Markója, Ministro de Justicia;

quienes, después de intercambiar sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1

1. Los Estados contratantes se comprometen a ejecutar recíprocamente, previa solicitud y de acuerdo con las condiciones que se fijan en los artículos siguientes, las resoluciones en materia penal dictadas con carácter definitivo por un tribunal de alguno de los Estados contratantes, en las que se condene a un nacional del otro Estado contratante a una pena o medida privativa de libertad.

2. La solicitud prevista en el párrafo 1 será formulada por el Estado en que se hubiere dictado la resolución judicial (Estado de condena). No obstante, ello no impedirá al Estado en que deba ser ejecutada la resolución (Estado de ejecución) que haga uso de su derecho a instar al Estado de condena e que presente una solicitud en virtud del párrafo 1.

3. A los fines del presente Convenio, el término medida designa:

a) Para el Reino de España, la custodia en un establecimiento de tratamiento médico.

b) Para la República Popular Húngara, el tratamiento médico conminatorio.

DERECHOS DEL CONDENADO

Artículo 2

La persona condenada, al igual que su representante legal, su cónyuge, padres naturales o hermanos o hermanas, podrá iniciar ante uno de los Estados contratantes, a su elección, el procedimiento previsto en el artículo 1. Todo condenado al que

el presente Convenio pueda ser aplicable, deberá ser informado por el Estado de condena de los elementos esenciales del mismo.

DOMICILIO, LUGAR DE RESIDENCIA

Artículo 3

La transferencia de la ejecución sólo podrá efectuarse si el domicilio o el lugar de residencia habitual del condenado están en el Estado de ejecución.

DOBLE INCRIMINACIÓN POR VÍA JUDICIAL

Artículo 4

La transferencia de la ejecución sólo podrá efectuarse si el hecho objeto de la resolución fuere también punible judicialmente en la legislación del Estado de ejecución.

DELITOS POLÍTICOS

Artículo 5

1. La transferencia de la ejecución no podrá efectuarse si el hecho objeto de la resolución judicial fuere considerado por el Estado de ejecución como un delito de naturaleza política.

2. No serán considerados de naturaleza política, los atentados contra la vida de un Jefe del Estado o de los miembros de su familia, ni los actos terroristas contra la vida de las personas.

3. No deberá considerarse de naturaleza política el delito en el que su carácter de derecho común, consideradas todas las circunstancias del caso, y en especial, la forma de cometerlo, los medios empleados o cuyo empleo se hubiere previsto y la gravedad de las consecuencias contempladas, predomine sobre su carácter político.

DELITOS MILITARES

Artículo 6

La transferencia de la ejecución no se verificará cuando el hecho objeto de la resolución judicial fuere considerado por el Estado de ejecución como un delito relativo exclusivamente a la violación de obligaciones militares.

DELITOS FISCALES

Artículo 7

1. La transferencia de la ejecución se efectuará también cuando se hubierre entablado el procedimiento penal en materia de tasas e impuestos, derechos aduaneros, devengos o cambios, si el hecho objeto de la resolución judicial hubiere sido penado por vía judicial de acuerdo con algún precepto penal que tenga analogía en la legislación del Estado de ejecución.

2. La transferencia de la ejecución no podrá denegarse por el sólo motivo de que la legislación del Estado de ejecución no tenga previstas normas de idéntica o análoga naturaleza a las de la legislación del Estado de condena en materia de tasas e impuestos, derechos aduaneros, devengos o cambios.

3. En aquellos casos que no sean los previstos en el párrafo 1, podrá denegarse la transferencia de la ejecución si el delito fuere considerado de naturaleza exclusivamente fiscal por el Estado de ejecución.

PRESCRIPCIÓN

Artículo 8

La transferencia de la ejecución no procederá si se hubiere producido la prescripción de la pena o de la medida privativa de libertad de acuerdo con la legislación de uno de los Estados contratantes.

TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN

Artículo 9

La transferencia de la ejecución no procederá si la resolución hubiere sido dictada por un tribunal de excepción.

JUICIO EN REBELDÍA

Artículo 10

La transferencia de la ejecución no procederá si la resolución hubiere sido dictada en rebeldía.

EXCLUSIÓN DE LA DOBLE CONDENA

Artículo 11

1. La transferencia no procederá en los casos en que se hubiere ya pronunciado en el Estado de ejecución una resolución definitiva por el mismo hecho contra el condenado y:

a) Hubiere sido absuelto;

b) La sanción impuesta:

— Hubiere sido satisfecha en su totalidad o esté en vías de ejecución, o

— Hubiere sido objeto de un indulto o amnistía que afecten a la totalidad de la sanción o a la parte aún no ejecutada de la misma;

c) Se hubiere establecido la culpabilidad del autor del delito sin imponerle una sanción.

2. La transferencia podrá denegarse si en el Estado de ejecución por el mismo hecho se hubiere ya dictado respecto al condenado auto de sobreseimiento o éste hubiere sido ya condenado definitivamente.

ORDEN PÚBLICO

Artículo 12

La transferencia de la ejecución no procederá si el Estado de ejecución considera que puede atentar a su orden público interno o a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico.

MÍNIMO INTERÉS EN LA EJECUCIÓN

Artículo 13

La transferencia de la ejecución no procederá si el condenado se hallare detenido en el Estado de condena y, al recibirse la solicitud le quedara por cumplir una pena privativa de libertad no superior a cuatro meses de duración. Al evaluar esta condición, se estimarán conjuntamente las penas privativas de libertad o el tiempo que quedara por cumplir de las mismas.

CONSENTIMIENTO DEL CONDENADO

Artículo 14

1. La ejecución en el Estado de ejecución sólo podrá llevarse a cabo con el consentimiento del condenado.

2. Cuando el condenado esté incapacitado para expresar válidamente su consentimiento, será preciso obtener el de su representante legal.

TÍTULO II. TRANSFERENCIA DE LA EJECUCIÓN Y SUS EFECTOS

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Artículo 15

Si el Estado de condena considera que se satisfacen las condiciones de la transferencia de la ejecución de conformidad con el presente Convenio, podrá solicitar del Estado de ejecución, con arreglo a su propia legislación, la transferencia de la ejecución de la pena o medida privativa de libertad impuestas.

ACEPTACIÓN

Artículo 16

El Estado de ejecución comunicará al Estado de condena, sobre la base de una solicitud de las previstas en el Artículo 15 acompañada de los documentos que se especifican en el Artículo 24, su disposición favorable, o no, a aceptar la solicitud, y de ser positiva, la medida en que lo será. La denegación total o parcial, deberá estar motivada.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

Artículo 17

1. Caso de que la solicitud prevista en el Artículo 15 sea aceptada, el Tribunal del Estado de ejecución sustituirá la pena impuesta en el Estado de condena por una pena o medida privativa de libertad análoga en naturaleza y duración. No obstante, cuando, por su naturaleza o duración, la pena o la medida privativa de libertad fueren incompatibles con las normas jurídicas del Estado de ejecución, el Tribunal de este último la adaptará a la pena o medida previstas en su propia legislación para un delito análogo. Esta pena o medida deberá corresponder, en todo lo posible, por su naturaleza o duración, a la impuesta por la resolución que se haya de ejecutar. El

Estado de ejecución quedará vinculado, en todo caso, por la constatación de los hechos que constituyan la base de la resolución dictada en el Estado de condena.

2. Durante la ejecución, la situación del condenado en el Estado de ejecución no podrá ser menos favorable, en el conjunto de sus efectos, a la que hubiere tenido si la ejecución se hubiera llevado a cabo en el Estado de condena.

3. Las modalidades de la ejecución, incluidas las relativas a la puesta en libertad condicional, serán determinadas por la legislación del Estado de ejecución. Siempre que no fueren incompatibles con la legislación del Estado de ejecución, se aplicarán las normas jurídicas del Estado de condena relativas a la libertad condicional que sean más favorables para con el condenado.

4. El tiempo transcurrido en situación de detención, así como la parte de la pena ya ejecutada en el Estado de condena, deberán ser computados enteramente para el tiempo de duración de la pena a cumplir en el Estado de ejecución.

REPARTO DE LA PENA

Artículo 18

Cuando sean varios los hechos objeto de la condena, y la ejecución de la pena privativa de libertad sólo afecte a algunos de ellos, el tribunal del Estado de ejecución determinará, en el ámbito del procedimiento previsto en el Artículo 17, la parte por cumplir de la pena.

EFFECTOS DE LA EJECUCIÓN

Artículo 19

1. Caso de que se requiera por la legislación de uno de los Estados contratantes, un tratado internacional para la validez de una sentencia extranjera, la resolución del Estado de condena tendrá, en el caso de transferencia de la ejecución, los mismos efectos jurídicos en el Estado de ejecución que tengan las resoluciones dictadas en materia penal en este último Estado.

2. Caso de que se aceptare la solicitud de transferencia de la ejecución, el Estado de condena entregará el condenado al Estado de ejecución tan pronto como fuera posible. Si la transferencia hubiere tenido lugar o el condenado se encontrara ya en el Estado de ejecución, los actos de ejecución deberán suspenderse en el Estado de condena.

3. Si el condenado se sustrae a la ejecución en el Estado de ejecución, el Estado de condena recupera su derecho de ejecución sobre la parte de la pena que quedare por ejecutar.

4. El derecho a la ejecución del Estado de condena dejará de existir definitivamente si el condenado hubiere cumplido la pena o medida, o si hubiere quedado dispensado definitivamente de la misma.

5. Si en el Estado de ejecución se hallaren en curso diligencias por el delito en que se basa la solicitud de transferencia de la ejecución, y ésta hubiere sido aceptada, dicho Estado deberá provisionalmente poner fin a esas diligencias. El Estado de ejecución recuperará su derecho a proseguirlas si el condenado se sustrajere a la ejecución. El Estado de ejecución pondrá fin definitivamente a las mismas si la pena o medida hubiere sido ya ejecutada o si el condenado hubiere quedado definitivamente dispensado de una u otra.

INDULTO, AMNISTIA Y REVISIÓN DE SENTENCIAS

Artículo 20

1. El condenado podrá ser indultado o amnistiado, bien por el Estado de condena o por el Estado de ejecución.
2. Sólo el Estado de condena posee el derecho a resolver sobre cualquier recurso de revisión interpuesto contra la sentencia.

INFORMACIONES

Artículo 21

1. Los Estados contratantes se comunicarán, tan pronto como fuera posible, cualquier circunstancia que pudiera influir en la ejecución.
2. En primer lugar, el Estado de condena está obligado a informar al Estado de ejecución sobre los indultos, amnistías o recursos de revisión de la sentencia.
3. El Estado de ejecución informará al Estado de condena de la terminación de la ejecución.

ENTREGA, TRÁNSITO

Artículo 22

1. Por lo que respecta a la entrega del condenado al Estado de ejecución, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 13 del Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Reino de España y la República Popular Húngara, firmado en Budapest el 10 de Mayo de 1985.
2. Se aplicará el Artículo 21 del Convenio mencionado en el párrafo 1 del presente Artículo, por lo que se refiere al tránsito a través del territorio de uno de los Estados contratantes, de un condenado entregado por uno de los Estados contratantes a un tercer Estado, o por un tercer Estado a alguno de los Estados contratantes, con el fin de ejecutar una pena o medida privativa de libertad dictadas contra el mismo.
3. Cualquiera de los Estados contratantes podrá denegar la autorización del tránsito si el condenado fuere nacional suyo.

LÍMITES DEL PROCESO PENAL

Artículo 23

1. El condenado, cuya transferencia se hubiere efectuado en aplicación del presente Convenio en el Estado de ejecución, no podrá ser perseguido, juzgado o limitado por lo que a su libertad personal en dicho Estado se refiere, o extraditado de nuevo a un tercer Estado, ni por hechos cometidos por el mismo antes de su transferencia y por los cuales no se hubiere solicitado su transferencia, ni por motivos que se hubieren producido antes de su transferencia.
2. La limitación prevista en el párrafo 1 no será aplicable en el caso de que:
 - a) El Estado de condena otorgue su consentimiento a la persecución, extradición o ejecución de la pena o de la medida;

b) Habiendo tenido la posibilidad de hacerlo legítimamente, el condenado no hubiere abandonado el territorio del Estado de ejecución dentro de los 45 días siguientes a su liberación definitiva, o, después de haberle abandonado, hubiere regresado voluntariamente.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO

LA SOLICITUD Y SUS DOCUMENTOS

Artículo 24

1. La solicitud prevista en el presente Convenio será formulada por escrito.
2. A la solicitud se acompañarán:
 - a) La sentencia o copia auténtica de la misma, provistas de certificación de su carácter firme y ejecutorio;
 - b) El texto de las disposiciones legales aplicadas y de las disposiciones sobre la puesta en libertad condicional;
 - c) Los datos más precisos posibles sobre la persona condenada, su nacionalidad, domicilio y lugar de residencia habitual;
 - d) Certificación del tiempo de detención a efectos de computación;
 - e) Acta de declaración cuyo contenido refleje el consentimiento del detenido;
 - f) Cualquier otro documento de importancia para la consideración de la solicitud.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SOLICITUD

Artículo 25

Si el Estado de ejecución considera que los datos y documentos que le hubieren sido proporcionados son insuficientes, solicitará la información complementaria necesaria. Podrá señalar un plazo para la entrega de esta información, que podrá ser prolongado previa solicitud justificada. A falta de dicha información complementaria, el Estado de ejecución resolverá basándose en los datos y documentos que se le hubieren proporcionado.

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Artículo 26

A fines del presente Convenio, el intercambio de documentación se hará entre los Ministerios de Justicia. Ello no excluirá la utilización de la vía diplomática.

LENGUA, LEGALIZACIÓN

Artículo 27

1. Las solicitudes y comunicaciones, así como los documentos que les acompañen en aplicación del presente Convenio, estarán exentos de su legalización.

2. Las solicitudes y comunicaciones, así como sus documentos se acompañarán de una traducción en francés o inglés.

GASTOS

Artículo 28

Los gastos ocasionados por la aplicación del presente Convenio corresponderán al Estado de ejecución, salvo los producidos exclusivamente en territorio del Estado de condena.

TÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29

El presente Convenio no afectará a las obligaciones que se deriven de los tratados multilaterales vigentes en material penal.

Artículo 30

El presente Convenio se aplicará igualmente a las resoluciones judiciales dictadas antes de su entrada en vigor.

Artículo 31

El presente Convenio será objeto de ratificación. Los instrumentos de ratificación se canjearán en Madrid.

Artículo 32

1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al canje de los instrumentos de ratificación.

2. El presente Convenio se concluye por un tiempo ilimitado. Cualquiera de los Estados contratantes podrá denunciarlo, mediante aviso previo de denuncia por escrito dirigido a la otra Parte por vía diplomática con seis meses de antelación.

3. Hecho en Budapest, el día veintiocho del mes de Septiembre de 1987, en dos ejemplares, en español, húngaro y francés. En caso de divergencias acerca de la interpretación o de la aplicación de su texto, las mismas se resolverán por vía diplomática.

Por el Reino de España:

[Signed — Signé]

FERNANDO LEDESMA BARTRET
Ministro de Justicia

Por la República Popular Húngara:

[Signed — Signé]

IMRE MARKOJA
Ministro de Justicia

[HUNGARIAN TEXT — TEXTE HONGROIS]

SZERZŐDÉS A SPANYOL KIRÁLYSÁG ÉS A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A BÜNTETŐ ÜGYEKBEH HOZOTT BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK KÖLCSÖNÖS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Öfelsége Spanyolország Királya és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

attól a szándektól vezetettve, hogy a két állam közötti jogi kapcsolatokat elmélyítsék és az egymás közötti jogi forgalmat megkönnyítsék, valamint, hogy az elítéltek társadalmi beilleszkedését előmozdítsák, megegyeztek abban, hogy szerződést kötnek a büntető ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös végrehajtásáról és ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték:

Öfelsége Spanyolország Királya: Fernando Ledesma Bartret urat, igazságügyminisztert,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa: dr. Markója Imre urat, igazságügyminisztert,

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

1. cikk

1. A Szerződő Államok kötelezik magukat, hogy megkeresésre az alábbi előírások és feltételek szerint kölcsönösen végrehajtják azokat a büntető ügyekben hozott határozatokat, melyekkel az egyik Szerződő Állam bírósága a másik Szerződő Állam állampolgárával szemben jogerősen szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést szabott ki.

2. Az 1. bekezdés szerinti megkeresést az az állam terjeszti elő, ahol a bírósági határozatot meghozták (Itélkező Állam). Ez azonban nem korlátozza annak az államnak, ahol a bírósági határozatot végre kell hajtani (Végrehajtó Állam), azt a jogát, hogy az Itélkező Államnál az 1. bekezdés szerinti megkeresést kezdeményezze.

3. E szerződés alkalmazásában az intézkedés kifejezés:

- a) a Spanyol Királyságban gyógyintézeti fogvatartást jelent;
- b) a Magyar Népköztársaságban a kényszergyógykezelést.

AZ ELITÉLT JOGA

2. cikk

Az elítélt, törvényes képviselője, házastársa, egyenesági rokonai vagy testvérei a Szerződő Államok bármelyikénél maguk is kezdeményezhetik az 1. cikk szerinti

eljárást. Minden elítéltet, akire a Szerződés alkalmazható, az Itélkező Államnak e Szerződés lényeges tartalmáról tájékoztatnia kell.

LAKÓHELY, TARTÓZKODÁSI HELY

3. cikk

A végrehajtás átvételének csak akkor van helye, ha az elítélt lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a Végrehajtó Államban van.

A CSELEKMÉNY KÖLCSÖNÖS BIRÓI BÜNTETHETŐSÉGE

4. cikk

A végrehajtás átvételének csak akkor van helye, ha a határozat alapjául szolgáló cselekmény a Végrehajtó Állam joga szerint is bírósági uton büntetendő.

POLITIKAI BÜNCSELEKMÉNYEK

5. cikk

1. A végrehajtás átvételének nincs helye, ha a határozat alapjául szolgáló cselekményt a Végrehajtó Állam politikai jellegű bűncselekménynek tekinti.

2. Nem tekinthetők politikai jellegű bűncselekményeknek az államfő, vagy a családtagjai elleni merénylet, sem pedig a személyek élete elleni terrorcselekmények.

3. Az olyan büntetendő cselekmény, amelynél — figyelemmel az adott eset összes körülményeire, különösen az elkövetés módjára, a felhasznált vagy kilátásba helyezett eszközökre vagy a beállott, illetőleg a szándékolt következmények súlyosságára — a cselekmény köztörvényi jellege a politikaihoz képest túlyomó, nem tekintendő politikai jellegű bűncselekménynek.

KATONAI BÜNCSELEKMÉNYEK

6. cikk

A végrehajtás átvételének nincs helye, ha a határozat alapjául szolgáló cselekmény a Végrehajtó Állam nézete szerint kizárólag a katonai kötelezettségek megsértésében áll.

PÉNZÜGYI BÜNCSELEKMÉNYEK

7. cikk

1. Illeték-, adó-, vám-, jövedéki- és devizaügyekben indított büntető eljárásoknál a végrehajtás átvételének szintén helye van, ha az elítélés alapjául szolgáló cselekmény a Végrehajtó Állam hasonló jellegű büntető törvényi rendelkezése szerint bírósági uton büntetendő.

2. A végrehajtás átvételét nem lehet kizárólag azzal az indokkal megtagadni, hogy a Végrehajtó Állam joga nem ismer azonos, illetőleg azonos jellegű illeték-, adó, vám-, jövedék- vagy devizarendelkezéseket, mint az Itélkező Állam joga.

3. Az 1. bekezdésben nem említett, a Végrehajtó Állam nézete szerint kizárólag pénzügyi jellegű bűncselekmény esetében a végrehajtás átvételét meg lehet tagadni.

ELÉVÜLÉS

8. cikk

A végrehajtás átvételének nincs helye, ha a szabadságvesztés büntetés vagy az intézkedés végrehajthatósága a két Szerződő Állam bármelyikének joga szerint elévült.

RENDKIVÜLI BIRÓSÁGOK

9. cikk

A végrehajtás átvételének nincs helye, ha a határozatot rendkívüli bíróság hozta.

TÁVOLLÉVŐ ELITÉLÉSE

10. cikk

A végrehajtás átvételének nincs helye, ha a határozatot az elítélt távollétében hozták.

A KETTŐS FELELŐSSÉGREVONÁS TITALMA

11. cikk

1. A végrehajtás átvételének nincs helye, ha az elítélttel szemben a Végrehajtó Államban ugyanazon cselekmény miatt már jogerős határozat született, amelyben

a) felmentő ítéletet hoztak;

b) a kiszabott büntetés:

— teljes mértékben letöltésre került, vagy letöltése folyamatban van;

— egésze vagy letöltetlen része egyéni kegyelem, vagy közkegyelem alá esik;

c) az elkövető bűnösségét joghátrány kiszabása nélkül állapították meg.

2. A végrehajtás átvétele megtagadható, ha a Végrehajtó Államban az elítélt vonatkozásában ugyanazon cselekmény miatt már megszüntető határozatot hoztak, vagy őt jogerősen elítélték.

KÖZREND

12. cikk

A végrehajtás átvételének nincs helye, ha az a Végrehajtó Állam nézete szerint közrendjét vagy jogrendjének alapelveit veszélyeztetné.

ELENYÉSZŐ VÉGREHAJTÁSI ÉRDEK

13. cikk

A végrehajtás átvételének nincs helye, ha az elítéltet az Itélkező Államban fogva tartják és a megkeresés kézhezvételének időpontjában 4 hónapot meg nem haladó szabadságvesztés büntetést kell végrehajtani. E feltétel elbírálása céljából a szabadságvesztés büntetéseket, vagy azok hátralévő, végrehajtandó részeit egybe kell számítani.

AZ ELITÉLT HOZZÁJÁRULÁSA

14. cikk

1. A Végrehajtó Államban történő végrehajtásra csak az elítélt hozzájárulásával kerülhet sor.

2. Ha az elítélt jogérvényes hozzájárulásra képtelen, akkor a törvényes képviselője hozzájárulását kell beszerezni.

II. RÉSZ. A VÉGREHAJTÁS ÁTVÉTELE ÉS HATÁSAI

A VÉGREHAJTÁS ÁTVÉTELE IRÁNTI MEGKERESÉS

15. cikk

Ha az Itélkező Állam nézete szerint a végrehajtás átvételének feltételei e Szerződés szerint fennállnak, akkor az Itélkező Állam saját belső jogának megfelelően megkeresheti a Végrehajtó Államot a kiszabott szabadságvesztésbüntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvétele iránt.

ELFOGADÁS

16. cikk

A 15. cikk szerinti megkeresés alapján, — amelyhez a 24. cikkben megjelölt mellékleteket kell csatolni — a Végrehajtó Állam értesíti az Itélkező Államot arról, hogy eleget tesz-e, — s ha igen, mennyiben — a megkeresésnek. A teljes vagy részleges elutasítást indokolni kell.

A VÉGREHAJTÁS FOGANATOSÍTÁSA

17. cikk

1. A 15. cikk szerinti megkeresés elfogadása esetén a Végrehajtó Állam bírósága azonos nemű és tartamu szabadságvesztésbüntetést vagy intézkedést állapít meg, mint amelyet az Itélkező Államban kiszabtak. Ha azonban a szabadságvesztésbüntetés vagy intézkedés nemét vagy tartamát illetően nem egyeztethető része a Végrehajtó Állam jogszabályaival, akkor azt a Végrehajtó Állam bírósága a saját joga szerint a hasonló bűncselekményra előírt büntetéshez vagy intézkedéshez igazítja. Ennek a büntetésnek vagy intézkedésnek nemét és tartamát tekintve a lehető legnagyobb mértékben meg kell felelnie annak a büntetésnek vagy intézkedésnek, amelyet a végrehajtandó határozat kiszabott. A Végrehajtó Államot minden

esetben kötik az Itélkező Államban hozott határozat alapjául szolgáló ténymegállapítások.

2. A Végrehajtó Államban az elítélt a végrehajtás során őszhatását tekintve nem kerülhet kedvezőtlenebb helyzetbe, mint ha a végrehajtás az Itélkező Államban történne.

3. A végrehajtás, beleértve a feltételes szabadságra bocsátást, a Végrehajtó Állam joga szerint történik. Az Itélkező Államnak a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó, és az elítélre kedvezőbb jogszabályait alkalmazni kell, amennyiben az a Végrehajtó Állam jogával nem összeegyeztethetetlen.

4. Az Itélkező Államban letartóztatásban töltött időt a Végrehajtó Államban kitöltendő szabadságvesztésbüntetés tartamába teljes egészében be kell számítani.

BÜNTETÉSMEGOSZTÁS

18. cikk

Ha az elítélés alapjául több cselekmény szolgál, a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának azonban csak e cselekmények egy része tekintetében van helye, a Végrehajtó Állam bírósága a 17. cikk szerinti eljárás keretében meghatározza az e cselekményekre jutó végrehajtandó részt.

A VÉGREHAJTÁS HATÁSAI

19. cikk

1. Ha a két Szerződő Állam egyikének joga szerint a külföldi ítélet érvényéhez nemzetközi szerződés szükséges, a végrehajtás átvétele esetén az Itélkező Állam határozatához ugyanazok a joghatások fűződnek a Végrehajtó Államban, mint ez utóbbi államban a büntető ügyekben hozott határozatokhoz.

2. Ha a végrehajtás átvételére irányuló megkeresést elfogadták, akkor az Itélkező Állam az elítéltet a lehető leghamarabb a Végrehajtó Államnak átadja. Ha az átadás megtörtént, vagy ha az elítélt már a Végrehajtó Államban tartózkodik, az Itélkező Államban a további végrehajtási cselekményeket abba kell hagyni.

3. Ha az elítélt a Végrehajtó Államban kivonja magát a végrehajtás alól, az Itélkező Államnak a büntetés hátralévő része tekintetében a végrehajtási joga feléled.

4. Az Itélkező Állam végrehajtási joga véglegesen megszűnik, ha az elítélt a büntetést vagy az intézkedést kitöltötte, vagy ha a büntetés alól véglegesen mentesítették.

5. Ha a Végrehajtó Államban az elítélt ellen a végrehajtás átvétele iránti megkeresés alapjául szolgáló cselekmény miatt büntető eljárás folyik és a megkeresést elfogadták, ez az állam a büntető eljárást ideiglenesen megszünteti. A Végrehajtó Állam bűnüldözési joga feléled, ha az elítélt a végrehajtás alól kivonja magát. A Végrehajtó Állam a büntető eljárást véglegesen megszünteti, ha a büntetést vagy intézkedést végrehajtották, vagy ha az elítéltet a büntetés alól véglegesen mentesítették.

EGYÉNI KEGYELEM, KÖZKEGYELEM, PERUJITÁS

20. cikk

1. Az elítéltet egyéni kegyelemben, vagy közkegyelemben részesítheti az Itélkező Állam, vagy a Végrehajtó Állam.

2. Az ítélet felülvizsgálatát célzó bármely kérelem elbírálására kizárólag az Itélkező Államnak van joghatósága.

KÖZLÉSEK

21. cikk

1. A Szerződő Államok a lehető leghamarabb értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a végrehajtást befolyásolhatja.

2. Az ítélező Állam elsősorban az egyéni kegyelemről, a közkegyelemről és a perujitásról értesíti a Végrehajtó Államot.

3. A Végrehajtó Állam értesíti az Itélkező Államot a végrehajtás befejeződéséről.

ÁTADÁS, ÁTSZÁLLÍTÁS

22. cikk

1. Az elítéltnak a Végrehajtó Állam részére történő átadására a Spanyol Királyság és a Magyar Népköztársaság között a kiadatásról és a büntügyi jogsegélyről 1985. május 10. napján aláírt szerződés 13. cikkét kell értelemszerűen alkalmazni.

2. Ha az elítéltet az egyik Szerződő Államból a másik Szerződő Állam területén keresztül egy harmadik államba, vagy pedig egy harmadik államból az egyik Szerződő Állam területén keresztül a másik Szerződő Államba kell átszállítani a vele szemben kiszabott szabadságvesztésbüntetés vagy intézkedés végrehajtása céljából, akkor az e cikk 1. bekezdés szerinti szerződés 21. cikkét kell értelemszerűen alkalmazni.

3. Bármely fél megtagadhatja az átszállítás engedélyezését, ha az elítélt az állampolgára.

A FELELŐSSÉGRE VONÁS KORLÁTAI

23. cikk

1. Ha e Szerződés alkalmazása során valamely elítéltnak a Végrehajtó Állam részére történő átadására került sor, akkor őt ott az átadása előtt elkövetett olyan cselekmény miatt, amelyre a hozzájárulás nem vonatkozik, vagy más, az átadása előtt keletkezett ok miatt nem lehet büntető eljárás alá vonni, sem elítélni vagy személyes szabadságában valamely módon korlátozni, sem pedig egy harmadik államnak kiadni.

2. Az 1. bekezdésben foglalt korlátozás nem áll fenn,

a) ha az Itélkező Állam hozzájárul a büntető eljáráshoz, a kiadatáshoz, vagy a büntetés, illetőleg intézkedés végrehajtásához;

b) ha az átadott elítélt végleges szabadulása után 45 napnál hosszabb ideig tartózkodik a Végrehajtó Államban, jóllehet azt jogszerűen elhagyhatta volna, vagy ha ezen állam elhagyása után oda önként visszatért.

III. RÉSZ. ELJÁRÁS

A MEGKERESÉS ÉS MELLÉKLETEI

24. cikk

1. Az e Szerződés szerinti megkeresést írásban kell elkészíteni.
2. A megkereséshez mellékelni kell:
 - a) az ítéletnek a jogerőre emelkedés és a végrehajthatóság igazolásával ellátott kiadmányát vagy hitelesített másolatát;
 - b) az alkalmazott törvényi rendelkezések, valamint a feltételes szabadságra bocsátásról szóló rendelkezések szövegét;
 - c) a lehető legpontosabb adatokat az elítéltről, állampolgárságáról, lakóhelyéről és szokásos tartózkodási helyéről;
 - d) a beszámítandó fogvatartási idő igazolását;
 - e) az elítélttel készített jegyzőkönyvet, amelyből hozzájárulása kitűnik;
 - f) más olyan iratot, amely a megkeresés elbírálása szempontjából jelentőséggel bírhat.

A MEGKERESÉS KIEGÉSZÍTÉSE

25. cikk

Ha a Végrehajtó Állam a neki megküldött adatokat és mellékleteket nem tartja kielégítőnek, kéri azoknak a szükséges információkkal való kiegészítését. A kiegészítés megküldésére megfelelő határidőt szabhat; ez indokolt kérelemre meghosszabbítható. Kiegészítés hiányában a Végrehajtó Állam a rendelkezésre álló adatok és mellékletek alapján dönt.

AZ ÉRINTKEZÉS MÓDJÁ

26. cikk

E Szerződés alapján az iratváltás az igazságügyminiszterek között történik. Ez nem zárja ki a diplomáciai ut igénybevételét.

NYELVHASZNÁLAT, HITELESITÉS

27. cikk

1. E Szerződés alkalmazása során a megkeresések és közlések, valamint a csatolandó mellékletek hitelesítése nem szükséges.
2. A megkereséseket és közléseket, valamint mellékleteiket angol vagy francia nyelvű fordítással kell ellátni.

KÖLTSÉGEK

28. cikk

Az e Szerződés alkalmazása során felmerült költségek a Végrehajtó Államot terhelik azoknak a költségeknek a kivételével, amelyek kizárólag az Itélkező Állam területén merültek fel.

IV. RÉSZ. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

29. cikk

E Szerződés nem érinti a hatályos többoldalu bűnügyi szerződésekből eredő kötelezettségeket.

30. cikk

E Szerződést azokra a bírósági határozatokra is alkalmazni kell, amelyeket a Szerződés hatálybalépése előtt hoztak.

31. cikk

Ezt a Szerződést meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat Madridban cserélik ki.

32. cikk

1. E Szerződés a megerősítő okiratok kicserélését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

2. E Szerződést határozatlan időre kötik. A Szerződést a Szerződő Államok bármelyike hat hónapos felmondási határidővel diplomáciai uton írásban felmondhatja.

3. Készült Budapesten, 1987. év szeptember hó 28. napján két példányban, spanyol, magyar és francia nyelven. A szöveg értelmezése vagy alkalmazása kapcsán felmerülő vélelénkülönbségek diplomáciai uton kerülnek megoldásra.

A Spanyol Királyság nevében:

[Signed — Signé]¹

A Magyar Népköztársaság nevében:

[Signed — Signé]²

¹ Signed by Fernando Ledesma Bartret — Signé par Fernando Ledesma Bartret.

² Signed by Imre Markoja — Signé par Imre Markoja.

CONVENTION¹ ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE RELATIVE À L'EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES DÉCISIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE

Sa Majesté le Roi D'Espagne et le Conseil de Présidence de la République Populaire Hongroise,

Désireux d'approfondir les relations juridiques entre les deux Etats et de faciliter leur communication dans le domaine judiciaire, ainsi que de favoriser le reclassement social des personnes condamnées, sont convenus de conclure une Convention relative à l'exécution réciproque des décisions judiciaires en matière pénale et, à cette fin, ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Espagne : Son Excellence Fernando Ledesma Bartret, Ministre de la Justice;

Le Conseil de Présidence de la République Populaire Hongroise : Dr. Imre Markója, Ministre de la Justice;

lesquels, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après :

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1. Les Etats contractants s'engagent à exécuter réciproquement, sur demande, selon les règles et sous les conditions déterminées aux articles suivants, les décisions rendues en matière pénale par lesquelles un tribunal d'un des Etats contractants a prononcé définitivement, contre un national de l'autre Etat contractant, une peine ou mesure privative de liberté.

2. La demande prévue au paragraphe 1 est présentée par l'Etat où la décision judiciaire a été rendue (Etat de condamnation). Cela n'empêche pas, toutefois, l'Etat où la décision doit être exécutée (Etat d'exécution) d'user de son droit à initier auprès de l'Etat de condamnation que ce dernier présente une demande en vertu du paragraphe 1.

3. Aux fins de la présente Convention, l'expression mesure désigne :

a) Pour le Royaume d'Espagne la garde dans un établissement de traitement médical.

b) Pour la République Populaire Hongroise le traitement médical comminatoire.

¹ Entrée en vigueur le 1^{er} février 1989, soit le premier jour du troisième mois ayant suivi l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu à Madrid le 16 novembre 1988, conformément au paragraphe 1 de l'article 32.

LES DROITS DU CONDAMNÉ

Article 2

Le condamné, ainsi que son représentant légal, son conjoint, ses parents directs ou bien ses frères et sœurs peuvent, eux aussi, initier, auprès de l'un des Etats contractants, à leur choix, la procédure prévue à l'article premier. Chaque condamné auquel la présente Convention peut être appliquée doit être informé par l'Etat de condamnation de l'essentiel de cette Convention.

DOMICILE, LIEU DE RÉSIDENCE

Article 3

Le transfèrement de l'exécution n'a lieu que si le domicile ou le lieu de résidence habituelle du condamné est dans l'Etat d'exécution.

DOUBLE INCRIMINATION PAR VOIE JUDICIAIRE DES FAITS

Article 4

Le transfèrement de l'exécution n'a lieu que si le fait faisant l'objet de la décision est également punissable par voie judiciaire selon la législation de l'Etat d'exécution.

INFRACTIONS POLITIQUES

Article 5

1. Le transfèrement de l'exécution n'a pas lieu lorsque le fait faisant l'objet de la décision est considéré par l'Etat d'exécution comme une infraction de nature politique.

2. Ne sera pas considéré comme de nature politique l'attentat contre la vie d'un Chef d'Etat ou des membres de sa famille ni les actes terroristes contre la vie des personnes.

3. Ne doit pas être considérée comme de nature politique l'infraction dont la nature de droit commun, prenant en considération toutes les circonstances du cas en question et, notamment, la méthode de la perpétration, les moyens utilisés ou ayant prévu d'être utilisés ainsi que la gravité des conséquences visées, prédomine sur la nature politique.

INFRACTIONS MILITAIRES

Article 6

Le transfèrement de l'exécution n'a pas lieu lorsque le fait faisant l'objet de la décision est considéré par l'Etat d'exécution comme une infraction portant exclusivement sur la violation aux obligations militaires.

INFRACTIONS FISCALES

Article 7

1. Le transfèrement de l'exécution a aussi lieu dans les cas où la procédure pénale a été engagée en matière de taxes et d'impôts, de douanes, de recettes ou de

changes si le fait faisant l'objet de la décision était réprimé par voie judiciaire, selon une disposition pénale analogue à la législation de l'Etat d'exécution.

2. Le transfèrement de l'exécution ne doit pas être refusé pour le seul motif que la législation de l'Etat d'exécution ne prévoit pas les mêmes dispositions ou des dispositions de nature analogue en matière de taxes et d'impôts, de douanes, de recettes ou de changes aux dispositions de la législation de l'Etat de condamnation.

3. Dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, le transfèrement de l'exécution peut être refusé si l'infraction est considérée par l'Etat d'exécution comme de nature exclusivement fiscale.

PREScription

Article 8

Le transfèrement de l'exécution n'a pas lieu si, selon la législation de l'un des Etats contractants, la prescription de la peine ou de la mesure privative de liberté est acquise.

TRIBUNAUX D'EXCEPTION

Article 9

Le transfèrement de l'exécution n'a pas lieu si la décision a été rendue par un tribunal d'exception.

JUGEMENT PAR DÉFAUT

Article 10

Le transfèrement de l'exécution n'a pas lieu si la décision a été rendue par défaut.

EXCLUSION DE LA DOUBLE CONDAMNATION

Article 11

1. Le transfèrement n'a pas lieu si dans l'Etat d'exécution contre le condamné une décision définitive a déjà été prononcée pour le même fait :

- a) Lorsqu'il a été acquitté;
- b) Lorsque la sanction infligée :

— A été entièrement subie ou est en cours d'exécution, ou

— A fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur la totalité de la sanction ou sur la partie non exécutée de celle-ci.

c) Lorsque la culpabilité de l'auteur de l'infraction a été constatée sans prononcer de sanction.

2. Le transfèrement peut être refusé si dans l'Etat d'exécution contre le condamné une ordonnance de non-lieu a été déjà intervenue pour le même fait ou il en a été définitivement condamné.

ORDRE PUBLIC

Article 12

Le transfèrement de l'exécution n'a pas lieu si l'Etat d'exécution estime qu'il est de nature à porter atteinte à son ordre public ou aux principes fondamentaux de son ordre juridique.

INTÉRÊT MINIME À L'EXÉCUTION

Article 13

Le transfèrement de l'exécution n'a pas lieu lorsque le condamné est détenu dans l'Etat de condamnation et, au moment de la réception de la demande, une peine privative de liberté ne dépassant pas 4 mois reste à exécuter. Lors de l'appréciation de cette condition les peines privatives de liberté ou la durée qui en reste à exécuter seront comptées ensemble.

CONSENTEMENT DU CONDAMNÉ

Article 14

1. L'exécution dans l'Etat d'exécution n'a lieu qu'avec le consentement du condamné.

2. Lorsque le condamné est incapable d'exprimer valablement son consentement, il faut obtenir celui de son représentant légal.

TITRE II. LE TRANSFÈREMENT DE L'EXÉCUTION ET SES EFFETS

DEMANDE EN VUE DU TRANSFÈREMENT

Article 15

Si l'Etat de condamnation estime que les conditions du transfèrement de l'exécution conformément à la présente Convention sont remplies, il peut, selon sa propre législation, demander à l'Etat d'exécution le transfèrement de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté infligée.

ACCEPTATION

Article 16

Sur la base d'une demande prévue à l'Article 15, accompagnée des annexes spécifiées à l'Article 24, l'Etat d'exécution informe l'Etat de condamnation s'il est prêt ou non, et si oui, dans quelle mesure à accepter une telle demande. Le refus, soit-il total ou partiel, doit être motivé.

L'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXÉCUTION

Article 17

1. Au cas où la demande prévue à l'Article 15 est acceptée, le tribunal de l'Etat d'exécution substituera une peine ou une mesure privative de liberté analogue, quant

à sa nature et durée, à celle infligée dans l'Etat de condamnation. Cependant, lorsque la peine ou la mesure privative de liberté serait, quant à sa nature ou durée, incompatible avec les règles juridiques de l'Etat d'exécution, le tribunal de ce dernier l'adapte à la peine ou à la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible, quant à sa nature ou sa durée, à celle infligée par la décision à exécuter. L'Etat d'exécution est, dans chaque cas, lié par la constatation des faits constituant la base de la décision rendue dans l'Etat de condamnation.

2. Au cours de l'exécution dans l'Etat d'exécution, la situation du condamné ne peut pas, quant à ses effets d'ensemble, être moins favorable que si l'exécution avait eu lieu dans l'Etat de condamnation.

3. Les modalités de l'exécution, y compris celles concernant la mise en liberté conditionnelle, sont déterminées par la législation de l'Etat d'exécution. A condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, les règles juridiques de l'Etat de condamnation plus favorables à l'égard du condamné concernant la mise en liberté conditionnelle seront appliquées.

4. La durée passée en arrestation ainsi que la partie déjà exécutée de la peine dans l'Etat de condamnation doivent être entièrement imputées sur la durée de la peine à subir dans l'Etat d'exécution.

LA RÉPARTITION DE LA PEINE

Article 18

Lorsqu'il y a plusieurs faits faisant l'objet de la condamnation, mais que l'exécution de la peine privative de liberté n'a lieu qu'à l'égard de certains de ces faits, le tribunal de l'Etat d'exécution détermine, dans le cadre de la procédure prévue à l'Article 17, la partie à exécuter de la peine.

LES EFFETS DE L'EXÉCUTION

Article 19

1. Lorsque, selon la législation de l'un des Etats contractants, un traité international est requis pour la validité d'un jugement étranger, la décision de l'Etat de condamnation a, au cas du transfèrement de l'exécution, les mêmes effets juridiques dans l'Etat d'exécution qu'ont les décisions prises en matière pénale dans ce dernier Etat.

2. Lorsque la demande en vue du transfèrement de l'exécution est acceptée, l'Etat de condamnation livre, aussitôt que possible, le condamné à l'Etat d'exécution. Si le transfèrement a eu lieu ou si le condamné se trouve déjà dans l'Etat d'exécution, les actes d'exécution doivent être suspendus dans l'Etat de condamnation.

3. Si le condamné se soustrait à l'exécution dans l'Etat d'exécution, l'Etat de condamnation reprend son droit d'exécution quant à la partie de la peine restant à exécuter.

4. Le droit à l'exécution de l'Etat de condamnation cesse définitivement d'exister si le condamné a subi la peine ou mesure, ou bien s'il en a été définitivement dispensé.

5. Si pour l'infraction servant de base à la demande en vue du transfèrement de l'exécution une poursuite est en cours dans l'Etat d'exécution et la demande a été acceptée, ce dernier Etat met provisoirement fin à la poursuite. L'Etat d'exécution reprend son droit à la poursuite lorsque le condamné se soustrait à l'exécution. L'Etat d'exécution met définitivement fin à la poursuite si la peine ou mesure a été exécutée ou si le condamné en a été définitivement dispensé.

GRÂCE, AMNISTIE, RÉVISION DU JUGEMENT

Article 20

1. Le condamné peut être gracié ou amnistié soit par l'Etat de condamnation soit par l'Etat d'exécution.
2. L'Etat de condamnation, seul a le droit de statuer sur tous recours en révision introduits contre le jugement.

INFORMATIONS

Article 21

1. Les Etats contractants s'informent, aussitôt que possible, de toutes les circonstances pouvant influencer l'exécution.
2. L'Etat de condamnation est tenu d'informer l'Etat d'exécution, en premier lieu, de la grâce, de l'amnistie et du recours en révision du jugement.
3. L'Etat d'exécution informe l'Etat de condamnation de l'achèvement de l'exécution.

REMISE, TRANSIT

Article 22

1. Quant à la remise du condamné à l'Etat d'exécution, l'Article 13 de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République Populaire Hongroise relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Budapest le 10 mai 1985¹, sera conformément appliqué.
2. L'Article 21 de la Convention citée au paragraphe 1 du présent Article s'appliquera, conformément au transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants d'un condamné livré par l'un des Etats contractants à un Etat tiers ou par un Etat tiers à l'un des Etats contractants en vue d'exécuter une peine ou mesure privative de liberté prononcée contre lui.
3. L'un des Etats contractants peut refuser d'accorder le transit si le condamné est son national.

LIMITES DE LA POURSUITE

Article 23

1. Le condamné dont le transfèrement a eu lieu en application de la présente Convention à l'Etat d'exécution, ne peut être poursuivi, jugé ou limité quant à sa liberté personnelle dans cet Etat, ou encore extradé à un Etat tiers ni pour des faits

¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 1498, n° 1-25807.

commis par lui avant son transfèrement et pour lesquels son transfèrement n'a pas été demandé ni pour des raisons qui se sont produites avant son transfèrement.

2. La limitation prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable, si :

a) L'Etat de condamnation donne son consentement à la poursuite, à l'extradition ou à l'exécution de la peine ou de la mesure;

b) Ayant eu la possibilité de le faire légitimement, le condamné n'a pas quitté le territoire de l'Etat d'exécution dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou après l'avoir quitté, il y est retourné volontairement.

TITRE III. PROCÉDURE

LA DEMANDE ET SES ANNEXES

Article 24

1. La demande prévue à la présente Convention sera formulée par écrit.

2. La demande est accompagnée :

a) De l'expédition ou copie authentique du jugement muni d'une certification de la force de chose jugée et du caractère exécutoire;

b) Du texte des dispositions légales appliquées et des dispositions sur la mise en liberté conditionnelle;

c) Des indications aussi précises que possibles de la personne condamnée, de sa nationalité, de son domicile et lieu de résidence habituelle;

d) D'un certificat sur la durée passée en arrestation à être imputée;

e) D'un procès-verbal dont le contenu reflète le consentement du détenu;

f) De tout autre document important pour la considération de la demande.

LE COMPLÉMENT DE LA DEMANDE

Article 25

Si l'Etat d'exécution estime que les indications et annexes qui lui avaient été fournis sont insuffisantes, il demande le complément d'informations nécessaires. Il peut fixer un délai pour la transmission du complément qui peut être, sur demande justifiée, prolongé. A défaut de complément l'Etat d'exécution décide sur la base des indications et annexes qui avaient été mis à sa disposition.

VOIES DE COMMUNICATION

Article 26

Aux fins de la présente Convention l'échange des documents se fait entre les Ministres de la Justice. Cela n'exclut pas l'utilisation de la voie diplomatique.

LANGUE, AUTHENTIFICATION

Article 27

1. Les demandes et communications ainsi que les annexes qui les accompagnent en application de la présente Convention, sont dispensées d'authentification.
2. Les demandes et communications ainsi que les annexes seront accompagnées d'une traduction en langues anglaise ou française.

FRAIS

Article 28

Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 29

La présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations découlant des traités multilatéraux en vigueur en matière pénale.

Article 30

La présente Convention sera appliquée également aux décisions judiciaires rendues avant son entrée en vigueur.

Article 31

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Madrid.

Article 32

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des Etats contractants pourra la dénoncer, en adressant à l'autre, par voie diplomatique, un préavis écrit de dénonciation de six mois.
3. Fait à Budapest, le 28 du mois de septembre 1987 en double exemplaire, en langues espagnole, hongroise et française. En cas de divergences à propos de l'interprétation du texte ou sur son application, celles-ci seront résolues par la voie diplomatique.

Pour le Royaume d'Espagne :

[*Signé — Signed*]¹

Pour la République
Populaire Hongroise :

[*Signé — Signed*]²

¹ Signé par Fernando Ledesma Bartret — Signed by Fernando Ledesma Bartret.

² Signé par Imre Markója — Signed by Imre Markója.

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT¹ BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE
HUNGARIAN PEOPLE'S REPUBLIC ON RECIPROCAL EN-
FORCEMENT OF JUDICIAL DECISIONS IN CRIMINAL CASES

His Majesty the King of Spain and the Presidential Council of the Hungarian People's Republic,

Desiring to enhance legal relations between the two States and to facilitate dealings between them in judicial matters, as well as to promote the social rehabilitation of convicted persons, have agreed to conclude an Agreement on the reciprocal enforcement of judicial decisions in criminal cases and have for that purpose appointed as their plenipotentiaries:

His Majesty the King of Spain: Fernando Ledesma Bartret, Minister of Justice;

The Presidential Council of the Hungarian People's Republic: Dr. Imré Markója, Minister of Justice;

who, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

PART I. GENERAL PROVISIONS

GENERAL PRINCIPLES

Article 1

1. The Contracting States undertake, on request and in accordance with the conditions stipulated in the following articles, reciprocally to enforce decisions in criminal cases where a court of one of the Contracting States has definitively imposed a custodial penalty or measure on a national of the other Contracting State.

2. Requests under paragraph 1 shall be made by the State in which the judicial decision has been taken (sentencing State). This shall not, however, prevent the State in which the decision is to be enforced (enforcing State) from exercising its right to press the sentencing State to submit a request under paragraph 1.

3. For the purposes of this Agreement, the term measure means:

(a) For the Kingdom of Spain, custody in an establishment for medical treatment.

(b) For the Hungarian People's Republic, compulsory medical treatment.

RIGHTS OF THE CONVICTED PERSON

Article 2

The convicted person, his legal representative, his spouse, his immediate relatives or his siblings, may initiate with either Contracting State, according to prefer-

¹ Came into force on 1 February 1989, i.e., the first day of the third month following the exchange of the instruments of ratification, which took place at Madrid on 16 November 1988, in accordance with article 32 (1).

ence, the proceedings provided for in article 1. Every convicted person to whom this Agreement may apply shall be informed by the sentencing State of the gist of the Agreement.

DOMICILE, PLACE OF RESIDENCE

Article 3

Enforcement may be transferred only if the convicted person has his domicile or habitual place of residence in the enforcing State.

DUAL JUDICIAL LIABILITY

Article 4

Enforcement may be transferred only if the act which is the subject of the judicial decision is also punishable by a court of law under the legislation of the enforcing State.

POLITICAL OFFENCES

Article 5

1. Enforcement may not be transferred if, in the opinion of the enforcing State, the act which is the subject of the judicial decision constitutes a political offence.

2. Attempts on the life of a Head of State or the members of his family, or terrorist acts directed against human life shall not be considered political offences.

3. An offence shall not be considered a political offence if, taking into account all the circumstances of the case, in particular the way in which the offence was committed, the means used or intended to be used and the seriousness of the anticipated consequences, its criminal character outweighs its political character.

MILITARY OFFENCES

Article 6

Enforcement shall not be transferred if, in the opinion of the enforcing State, the act which is the subject of the judicial decision constitutes exclusively a failure to fulfil military duties.

FISCAL OFFENCES

Article 7

1. In criminal proceedings relating to levies, taxes, customs duties, income or foreign exchange, enforcement shall be transferred if the act which is the subject of the judicial decision would be punishable by a court of law under a similar statutory penal provision of the enforcing State.

2. Transfer of enforcement shall not be refused on the sole ground that the legislation of the enforcing State does not contain provisions identical with or similar to those of the legislation of the sentencing State in regard to levies and taxes, customs duties, income or foreign exchange.

3. In cases other than those provided for in paragraph 1, transfer of enforcement may be refused if, in the opinion of the enforcing State, the offence is of an exclusively fiscal nature.

PERIOD OF LIMITATION

Article 8

Enforcement shall not be transferred if, under the legislation of either Contracting State, the custodial penalty or measure has become time-barred.

COURTS OF SPECIAL JURISDICTION

Article 9

Enforcement shall not be transferred if the decision was taken by a court of special jurisdiction.

JUDGEMENTS BY DEFAULT

Article 10

Enforcement shall not be transferred if the decision was taken by default.

EXCLUSION OF DOUBLE SENTENCING

Article 11

1. Transfer shall not take place if the convicted person has already been subject to a final decision for the same act in the enforcing State and:

- (a) Has been acquitted;
- (b) The sentence pronounced:
 - Has been served completely or is being served, or
 - Has been the subject of a pardon or amnesty respecting the sentence as a whole or that part of it not already served.
- (c) The guilt of the perpetrator of the offence has been proved but no penalty has been imposed.

2. Transfer may be refused if in the enforcing State a charge against the convicted person for the same act has already been dismissed or he has been definitively convicted of it.

PUBLIC POLICY

Article 12

Enforcement shall not be transferred if, in the opinion of the enforcing State, it is likely to endanger its public policy or the basic principles of its legal system.

MINIMAL INTEREST OF ENFORCEMENT

Article 13

Enforcement shall not be transferred if the convicted person is in custody in the sentencing State and, at the time of the request, a custodial penalty not exceeding

four months remains to be enforced. In determining this circumstance, the custodial penalties or the time still to be served shall be aggregated.

CONSENT OF THE CONVICTED PERSON

Article 14

1. Enforcement shall not take place in the enforcing State without the consent of the convicted person.
2. When the convicted person is not capable of expressing his consent in a valid manner, consent must be obtained from his legal representative.

PART II. TRANSFER OF ENFORCEMENT AND ITS EFFECTS

REQUESTS FOR ENFORCEMENT

Article 15

If the sentencing State considers that the conditions are met for transferring enforcement under this Agreement, it may, in accordance with its own legislation, request the enforcing State to accept enforcement of the custodial penalty or measure imposed.

ACCEPTANCE

Article 16

On the basis of a request made under article 15, accompanied by the documents referred to in article 24, the enforcing State shall inform the sentencing State whether it is willing or unwilling, and in the case of the former to what extent it is willing to accept such a request. The reasons for total or partial refusal must be given.

IMPLEMENTATION OF ENFORCEMENT

Article 17

1. If a request under article 15 is accepted, the court of the enforcing State shall replace the penalty imposed by the sentencing State by a custodial penalty or measure of similar type and length. However, if by reason of its type or length such custodial penalty or measure is not consistent with the legal rules of the enforcing State, the court of the latter shall bring it into line with the custodial penalty or measure provided for under its own legislation for a similar offence. So far as possible, the type and length of the penalty or measure shall conform to that imposed by the decision to be enforced. In every case, the enforcing State shall be bound by the established facts that constitute the basis for the decision taken in the sentencing State.
2. During enforcement in the enforcing State, the overall effect on the situation of the convicted person shall not be less favourable than if the sentence had been enforced in the sentencing State.

3. The modalities of enforcement, including those relating to probation, shall be determined by the legislation of the enforcing State. Provided they are not incompatible with the legislation of the enforcing State, the legal rules of the sentencing State in regard to probation that are more favourable to the convicted person shall be applied.

4. Time spent in custody, and the part of the sentence already served in the sentencing State, shall be deducted in full from the duration of the term of imprisonment to be served in the enforcing State.

DIVISION OF THE SENTENCE

Article 18

When a sentence is based on more than one act but enforcement of the custodial penalty applies to certain of those acts only, the court of the enforcing State shall determine, pursuant to the procedure provided for in article 17, the part of the sentence to be enforced.

EFFECTS OF ENFORCEMENT

Article 19

1. When, under the legislation of either Contracting State, an international treaty is required to render a foreign judgement valid, the decision of the sentencing State shall have, in the case of the transfer of enforcement, the same legal effects in the enforcing State as are attached to that State's own decisions in criminal matters.

2. When a request for transfer of enforcement has been accepted, the sentencing State shall transfer the convicted person to the enforcing State as soon as possible. If the transfer has taken place or the convicted person is already in the enforcing State, enforcement measures in the sentencing State shall be suspended.

3. If the convicted person evades enforcement in the enforcing State, the sentencing State shall recover the right to enforce the remainder of the sentence.

4. The right of the sentencing State to enforce shall expire when the convicted person has served his sentence involving a penalty or measure or has received an absolute discharge.

5. If proceedings are under way in the enforcing State for the offence that is the basis of the request for transfer of enforcement and that request has been accepted, that State shall temporarily suspend the proceedings. The enforcing State shall recover the right to continue the proceedings if the convicted person evades enforcement. The enforcing State shall end the proceedings if the sentence involving a penalty or measure has already been served, or if the convicted person has received an absolute discharge.

PARDON, AMNESTY AND REVIEW OF JUDGEMENT

Article 20

1. The convicted person may be pardoned or given amnesty by either the sentencing State or the enforcing State.

2. Only the sentencing State shall be competent to rule on any application for review of the judgement.

INFORMATION

Article 21

1. The Contracting States shall inform each other as soon as possible of all circumstances that may have a bearing on enforcement.

2. The sentencing State shall inform the enforcing State, in the first place, of any pardon, amnesty or application for review of the judgement.

3. The enforcing State shall inform the sentencing State of the completion of enforcement.

SURRENDER AND TRANSIT

Article 22

1. Article 13 of the Agreement concerning Extradition and Judicial Assistance in Criminal Matters between the Kingdom of Spain and the Hungarian People's Republic signed at Budapest on 10 May 1985,¹ shall apply to the surrender of the convicted person to the executing State.

2. Article 21 of the Agreement referred to in paragraph 1 of this article shall apply to the transit through the territory of either Contracting State of a convicted person surrendered by either Contracting State to a third State, or by a third State to either Contracting State, for the purpose of enforcing a sentence involving a custodial penalty or measure imposed on him.

3. Either Contracting State may refuse to authorize such transit if the convicted person is a national of that State.

LIMITS OF PROSECUTION

Article 23

1. A convicted person who has been transferred to the enforcing State under this Agreement may not be prosecuted, tried or subjected to any encroachment on his personal freedom in that State, or extradited to a third State, either for acts committed by him before being transferred and for which no request has been made for his transfer, or for reasons that may have arisen before his transfer.

2. The restriction under paragraph 1 shall not apply,

(a) where the sentencing State consents to prosecution, extradition or enforcement of the penalty or measure;

(b) where the convicted person, although able to do so lawfully, has not left the territory of the enforcing State during the 45 days following his final release, or has returned there voluntarily after leaving it.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1498, No. I-25807.

PART III. PROCEDURE

THE REQUEST AND ITS ANNEXES

Article 24

1. Requests under this Agreement shall be made in writing.
2. The following shall be attached to the request:
 - (a) A transcript or true copy of the sentence together with conformation of its finality and enforceability;
 - (b) The text of the legal provisions applied and of those respecting probation;
 - (c) Particulars, as accurate as possible, of the convicted person, his nationality and his domicile and habitual place of residence;
 - (d) Confirmation of the time spent in custody which is to be deducted;
 - (e) A record reflecting the consent of the detainee;
 - (f) Any other document that may be of importance for considering the request.

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE REQUEST

Article 25

Should the enforcing State find that the information and documents provided to it are insufficient, it shall request the necessary supplementary information. It may set a time-limit for receipt of this information, which may, upon a well-founded request, be extended. In the absence of any supplementary material, the enforcing State shall make its decision on the basis of the information and documents made available to it.

MEANS OF COMMUNICATION

Article 26

For the purposes of this Agreement, the exchange of documentation shall take place between the Ministries of Justice. This shall not exclude use of the diplomatic channel.

LANGUAGE, AUTHENTICATION

Article 27

1. Requests and communications, and the documents accompanying them pursuant to this Agreement, shall not require authentication.
2. Requests and communications and any attached documents shall be accompanied by a translation into English or French.

EXPENSES

Article 28

Costs arising from the implementation of this Agreement shall be the responsibility of the enforcing State, save for expenditures incurred exclusively in the territory of the sentencing State.

PART IV. FINAL PROVISIONS

Article 29

This Agreement shall not affect obligations arising from existing multilateral treaties on criminal matters.

Article 30

This Agreement shall apply also to judicial decisions rendered before its entry into force.

Article 31

This Agreement shall be ratified. The instruments of ratification shall be exchanged at Madrid.

Article 32

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the exchange of the instruments of ratification.
2. This Agreement shall be concluded for an indefinite period. It may be denounced by either Contracting State in writing through the diplomatic channel on six months' notice.
3. Done at Budapest, on 28 September 1987, in duplicate, in the Spanish, Hungarian and French languages. Any differences in regard to the interpretation of the text or its application shall be settled through the diplomatic channel.

For the Kingdom of Spain:

[Signed]

FERNANDO LEDESMA BARTRET
Minister of Justice

For the Hungarian
People's Republic:

[Signed]

IMRE MARKÓJA
Minister of Justice

